

MINERAÇÃO TRANSNACIONAL E RESISTÊNCIAS SOCIAIS NA ÁFRICA E NA AMÉRICA LATINA

Experiências de resistência e de mobilização social frente às estratégias corporativas das companhias Vale (Brasil) e AngloGold Ashanti (África do Sul) na Argentina, Colômbia, Peru, Angola e Moçambique.



MINERÍA TRANSNACIONAL Y RESISTENCIAS SOCIALES EN ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA

Experiencias de resistencia y de movilización social frente a las estrategias corporativas de las compañías Vale (Brasil) y AngloGold Ashanti (Sudáfrica) en Argentina, Colombia, Perú, Angola y Mozambique.

Una publicación de Diálogo de los Pueblos y Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL), 2011.

ELABORACIÓN¹

Emilio Taddei, José Seoane y Clara Algranati, con la colaboración del equipo del GEAL.

REVISIÓN Y TRADUCCIÓN

Celina Lagrutta

DISEÑO GRÁFICO

Guto Miranda

APOYO



Las opiniones expresadas por los autores del texto no comprometen las diversas posiciones políticas de las organizaciones participantes en la publicación del material.

Este material puede ser reproducido total o parcialmente siempre que se cite la fuente del mismo.

¹ José Seoane es sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA, Argentina) y miembro del GEAL.

Emilio Taddei es politólogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa, Argentina) y miembro del GEAL.

Clara Algranati es socióloga, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y miembro del GEAL.

RESUMEN

Este trabajo presenta las principales conclusiones de un estudio sobre las características y consecuencias que depara el nuevo ciclo de la minería transnacional, particularmente en África y América Latina, así como analiza el desarrollo y las estrategias corporativas de dos de los conglomerados empresarios protagonistas de este proceso: la Vale (Brasil) y la AngloGold Ashanti (Sudáfrica). En base a este panorama, se examinan algunas de las experiencias de resistencia y de lucha contra los efectos de los emprendimientos mineros de estas compañías en Argentina, Colombia, Perú, Angola, Mozambique y Sudáfrica. La primera parte del trabajo está dedicada a presentar las características más distintivas del nuevo ciclo de la minería transnacional, signado, entre otras cuestiones, por la explotación minera a cielo abierto. Luego se presentan las particularidades más salientes de las citadas empresas mineras, de sus yacimientos mineros en los países mencionados y los contornos de las estrategias de “governabilidad social” desarrolladas por las mismas. Por último, se presenta una sintética reseña de las experiencias de resistencia más destacadas protagonizadas por distintos movimientos y organizaciones sociales que luchan contra el desarrollo de la megaminería en los países considerados. En este sentido, las observaciones preliminares aquí presentadas tienen por objetivo ofrecer herramientas para la reflexión sobre los desafíos que afrontan las comunidades y pueblos afectados así como contribuir a la discusión colectiva sobre el papel de la minería transnacional en el capitalismo contemporáneo y sobre los retos de las convergencias internacionales de las luchas antimineras y por la desmercantilización de la vida.

GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y MINERÍA TRANSNACIONAL

La sangrienta conquista de América perpetrada por los ibéricos a finales del siglo XV marcó la apertura de un nuevo tiempo histórico en la experiencia civilizatoria de la humanidad. Este estuvo signado por la constitución paulatina, pero ininterrumpida desde entonces, del primer patrón de poder a escala mundial y su expansión geográfica bajo la hegemonía político-imperial de la llamada “civilización occidental” (Quijano, 2000). Dicha experiencia estuvo desde sus orígenes intrínsecamente vinculada al proceso de expoliación al que fueron sometidos los pueblos de Nuestra América-Abya Yala por parte de los conquistadores. La extracción y apropiación de metales preciosos fue decisiva en la monetización de las redes comerciales bajo el peso del oro y la plata “europeos” arrancados de las Américas. El “eurocentramiento” del mundo ocurrido a partir del siglo XVI y la apertura del ciclo histórico hasta hoy conocido como “modernidad” estarán estrechamente asociados, entre otras cuestiones, a la capacidad europea de ejercer el control de las redes comerciales hasta entonces bajo dominio de distintas sociedades asiáticas. Este proceso supuso asimismo una difusión del capital como relación social hegemónica a escala planetaria y del capitalismo como modo de producción dominante y vehículo de la división racial del trabajo cuyos rasgos impregnan hasta la actualidad la geografía social del capitalismo. Sin embargo esta experiencia no dejó de estar marcada, desde el momento mismo de la conquista americana y hasta nuestros días, por procesos de resistencias y lucha protagonizados por los pueblos sometidos a la dinámica del nuevo patrón de poder.

La perfusión y saqueo de los socavones de plata y oro organizados por los colonizadores ibéricos a costa de las vidas de los pueblos originarios fue la marca distintiva de la apertura de ese tiempo histórico. La explotación de la minería metalífera marcó el inicio de un prolongado ciclo de desposesión de los bienes naturales en América Latina que quedó magistralmente condensado en la metáfora de “las venas abiertas latinoamericanas” formulada por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, venas por las que drenaron y drenan aún hoy sus bienes hacia los centros metropolitanos del capitalismo. La “moderna” colonización africana ocurrida desde mediados de 1870 en la fase de expansión del

imperialismo industrial-financiero constituyó, con contornos similares a los de la trágica experiencia de las otrora Indias Occidentales, pero también con particularidades propias, un nuevo capítulo de la expansión de este patrón mundial de poder. Como sucediera cuatrocientos años antes, nuevamente la expoliación de los bienes comunes naturales – en particular de los minerales – y el exterminio y subordinación de los pueblos originarios tiñeron la brutal experiencia “civilizatoria” europea en tierras africanas y contribuyeron a dar un nuevo aliento expansivo en el siglo XIX al patrón de poder colonial-moderno.

En las últimas décadas del siglo XX la extracción minera metalífera y no metalífera conoció un nuevo e inusitado impulso a escala mundial bajo la renovada mundialización capitalista, ahora en su fase neoliberal. Distintos procesos convergieron en la promoción del nuevo “boom minero” de inicios del siglo XXI. Por una parte, la transformación y consolidación de un nuevo patrón socio-técnico y tecnológico del capital desempeñaron un papel importante en la mercantilización de ciertos minerales metalíferos y no metalíferos otrora excluidos del proceso de valorización capitalista. De esta forma, la llamada “tercera revolución industrial” de la era informática y digital y el ingente requerimiento de componentes metalíferos y minerales para la producción en masa de nuevos productos electrónicos y digitales estimularon lo que es hoy una nueva carrera mundial hacia su control y apropiación. Así también, la llamada “revolución verde” de fines del siglo XX, que conllevó la difusión a escala mundial del agrobusiness como paradigma dominante de la producción de alimentos, implicó la emergencia de un modelo productivo alimentario altamente mercantilizado, que encuentra en la producción creciente de agroquímicos uno de sus sostenes. La composición química y elaboración industrial de muchos de estos productos demandan también “nuevos” minerales no metalíferos.

El aumento de la demanda y el incremento de los precios de los minerales también contribuyeron a la expansión de la actividad minera a nivel internacional. Por otro lado, el proceso de concentración de capital y riqueza que signa la fase neoliberal del capitalismo también tuvo su expresión en el sector minero. Esto se reflejó en la creación de nuevos conglomerados empresarios, surgidos de las compras y/o fusiones entre distintas compañías. La combinación de estas tendencias resultó en una creciente expansión de las inversiones y de los emprendimientos de las mega corporaciones mineras. Así, una vez más, el llamado Tercer Mundo fue el escenario privilegiado del nuevo ciclo de expansión de la minería, ahora bajo el predominio de estas corporaciones transnacionales.

En el contexto de la intensificación de los procesos de privatización y liberalización, los países de la llamada “periferia del capitalismo” promovieron en los años '90 reformas pro-mercado que configuraron un contexto político, jurídico y económico sumamente favorable a los intereses y estrategias productivas

y financieras de las corporaciones transnacionales. Estos procesos resultaron particularmente intensos en distintos países de América Latina, donde se implementaron verdaderas contrarreformas jurídicas, a partir de la aprobación de nuevas leyes y códigos mineros que favorecieron el libre acceso y apropiación de las transnacionales en territorios que eran considerados, por derecho o de hecho, bienes públicos o comunes. Este proceso de “balizamiento neoliberal” de las condiciones de inversión privada en el sector minero se combinó con el aumento de los precios minerales y configuró un escenario ampliamente favorable al capital privado transnacional en este sector de actividad. Los emprendimientos mineros florecieron con particular intensidad a inicios del nuevo milenio, tanto en países de vasta tradición minera (particularmente en algunos países andinos de América Latina o en el Sur de África) como en otros donde esta actividad había quedado restringida durante décadas a espacios geográficos acotados y que se convertían ahora en nuevos centros estratégicos de la producción minera por sus reservas no explotadas. La intensidad y rapidez de la expansión de estos nuevos emprendimientos da cuenta de un nuevo ciclo minero que modificó la geografía y territorialidad social de regiones enteras en los países “periféricos” y resulta decisivo en la consolidación del perfil extractivo-exportador dominante de la actividad económica en los ahora llamados “países emergentes”. En este sentido, las dinámicas y características políticas, económicas y sociales que articulan el ciclo productivo de la “nueva minería” evocan – con las particularidades del actual momento histórico – los fantasmas del saqueo de los bienes naturales que habitan la historia latinoamericana y africana desde hace cinco siglos, actualizando un proceso de recolonización que erosiona la soberanía de los pueblos e intensifica la mercantilización de la vida (Seoane, Taddei, Algranati, 2010).

Rasgos y características distintivas de la minería transnacional en la era neoliberal.

En su configuración actual, el extractivismo minero de la fase neoliberal asume características novedosas y particulares – por sus modalidades tecnológicas, productivas, de inversión y de comercialización – que lo distingue de las características de esta actividad en el pasado. Dichas particularidades suponen una serie de transformaciones con consecuencias regresivas; por ejemplo, entre otros, en el impacto ambiental de los emprendimientos, la desestatización de la regulación social y la privatización, la reconfiguración de las relaciones sociales en los territorios y el estrechamiento de los derechos democráticos de las poblaciones afectadas. Sobre ello, presentamos a continuación, de forma sintética, algunas de las principales características y problemas de la actual expansión de la megaminería.

Una primera cuestión refiere a las escalas y modalidades técnicas que asume la explotación minera contemporánea. La sobreexplotación de minas subterrá-

neas practicada durante siglos trajo como consecuencia el agotamiento de ciertos minerales metalíferos. Es por ello que la satisfacción de la creciente demanda de minerales metalíferos y no metalíferos significó, en la perspectiva de las grandes multinacionales y gobiernos, la creciente difusión de nuevos métodos y técnicas que garantizaran la recolección y procesamiento de la gran cantidad de recursos que se encuentran todavía dispersos en la superficie de los territorios. De esta forma, en las últimas dos décadas se han consolidado las prácticas mineras que sustentan la extracción a través de la voladura de grandes masas rocosas y/o de la explotación intensiva con procedimientos químicos. Esta práctica es la que se conoce como “minería a cielo abierto”. En muchos casos, esta modalidad se lleva a cabo a través de la licuefacción de la roca con el empleo de sustancias químicas altamente contaminantes, como el mercurio, el cianuro, el ácido sulfúrico, entre otros. Así como requiere grandes cantidades de agua necesaria para producir un “barro químico” a partir del cual se extraen los distintos minerales. La combinación de ambos procesos tiende a agotar y contaminar rápidamente los bienes hídricos de las regiones sometidas a explotación minera.

Por otra parte, debido a estas dinámicas productivas, la industria minera contemporánea requiere de cuantiosos volúmenes de capital para el desarrollo de los emprendimientos, cuya rentabilidad está asociada, en la mayoría de los casos, a ciclos de explotación prolongados en el tiempo. Esta característica, entre otros factores, ha estimulado los procesos de concentración de capital en el sector a través de la conformación de grandes conglomerados empresariales y ha aumentado la presión sobre los Estados para financiar con recursos públicos los ingentes volúmenes de inversión requeridos por las empresas privadas y públicas del sector para asegurar su rentabilidad a largo plazo. Así, como ya señalamos, el desarrollo de la megaminería fue acompañado, en las últimas décadas, de gigantescos y regulares procesos de concentración de la propiedad del capital minero a escala mundial. Los procesos de compra y/o fusión de empresas existentes resultaron en la consolidación de conglomerados mineros asociados a potentes grupos económicos industriales y financieros con capacidad de afrontar inversiones a gran escala. La conformación de estos conglomerados aumentó su capacidad de presión y de lobby empresarial sobre los Estados, particularmente en los países del llamado Tercer Mundo, y sobre las distintas fracciones de las clases dominantes locales. Manifestación de ello fue y es el creciente poder de estas megaempresas para promover y obtener la modificación de regulaciones jurídicas preexistentes con el objetivo de liberalizar y flexibilizar las condiciones de inversión minera y legitimar regímenes impositivos que garanticen ganancias extraordinarias en perjuicio del interés público. La expansión de esta actividad hegemónica por corporaciones transnacionales erosiona, así, en forma constante y creciente, la soberanía de los pueblos y de los Estados.

Desde el siglo XIX, la dinámica empresarial minera a nivel mundial se caracterizó por la expansión y dominio de empresas multinacionales procedentes de un núcleo de países pertenecientes o asociados al primer centro del capitalismo avanzado (particularmente anglosajones como Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña). La prolongación de esta realidad se combina hoy con la emergencia de nuevos conglomerados mineros transnacionales originarios de otras regiones (privados, privatizados o estatales; y donde se entrelazan capitales locales y transnacionales) que conquistaron un peso creciente y, en algunos casos, se consolidaron como primeras o segundas empresas mundiales en distintas ramas de la actividad minera. Este proceso es particularmente visible en los casos de Brasil, Rusia, India, China (los países integrantes del denominado BRIC) y en menor medida en Sudáfrica, países considerados hoy “actores emergentes” del capitalismo internacional. El rápido desarrollo de inversiones de empresas originarias de estos países en regiones del Tercer Mundo abre numerosos interrogantes y plantea enormes desafíos en relación a la naturaleza de las relaciones sur-sur en el actual contexto internacional. Un ejemplo paradigmático de ello es el caso de la empresa brasilera Vale, que se consolidó como la primera compañía mundial de producción de mineral de hierro. En el caso de la India, pueden referirse también las experiencias de la Coal India Ltd., el mayor productor mundial de carbón, que adquirió en los últimos años minas en Estados Unidos, Australia e Indonesia; de la Steer Overseas Pvt. Ltd. (SOPL), dedicada a la extracción e industrialización de acero y perteneciente al poderoso Grupo Misra; y también de Ashapura Minechem, el mayor explorador y procesador de minerales en India. En el caso de China se destacan la China Minmetals y su subsidiaria para inversiones en el extranjero Minerals and Metals Group (MMG), la mayor empresa minera metalífera del gigante asiático. Y también la Angang Steel, Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd. (compañía dedicada a la producción de cobre y níquel), MCC (que desarrolla exploraciones de oro y plata en Argentina), He Hopefull Grain & Oil Group (cobre y hierro), que lideran la expansión del país asiático en el sector con activa política de inversiones en África y en América Latina. En el caso sudafricano, país con una vasta historia y tradición minera ligada a capitales británicos y holandeses, entre otros, puede mencionarse la empresa AngloGold Ashanti, compañía líder en la producción mundial de oro y que está presente en Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, China, Dubai, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Gabon, Ghana, Guinea, Islas Salomón, Mali, Namibia, Nueva Zelanda, República Democrática del Congo, Rusia, Senegal, Sudáfrica y Tanzania.

Por otra parte, el desarrollo de los emprendimientos mineros en nuevos espacios geográficos plantea, para estas grandes corporaciones, la necesidad de contar con una infraestructura adecuada que garantice su funcionamiento

(principalmente grandes cantidades de energía eléctrica y agua) y la exportación de los minerales obtenidos (rutas, ferrocarriles, puertos, etc.). En este sentido, resulta decisiva la acción de los Estados nacionales y de los organismos internacionales de crédito como promotores y financiadores de estas obras de infraestructura. Los imperativos del modelo extractivista operan, así, como legitimadores de cierta inversión estatal. El mentado “regreso del Estado” como agente de promoción del “desarrollo” en la economía constituye uno de los núcleos centrales de la retórica y la práctica “neodesarrollista” promotora del impulso extractivista y de los emprendimientos mineros en particular. Esto resulta particularmente visible en América Latina, donde muchos de los gobiernos electos en el último lustro, como resultado de procesos de interpelación a las políticas neoliberales, estimularon la promoción de inversiones mineras transnacionales y financian con fondos públicos las obras de infraestructura requeridas por esta industria. La acción del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil, es paradigmática en relación a esta cuestión. La relativa legitimidad conquistada por las políticas neodesarrollistas en el actual contexto de crecimiento económico opera inhibiendo o clausurando el debate democrático sobre las consecuencias socioambientales, económicas y políticas de asignar recursos públicos para garantizar y sostener la explotación capitalista intensiva de los bienes comunes naturales.

En relación a esta cuestión, la promoción del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica) es quizás uno de los casos más emblemáticos. A su vez, la creciente inversión pública en beneficio de los emprendimientos mineros se combina, en la mayoría de los casos, con la vigencia de marcos jurídicos regulatorios –resultados de los cambios legislativos introducidos en la década de los ’90 o incluso más recientemente– que benefician significativamente el accionar de estas corporaciones; por ejemplo, a través de regímenes impositivos irrisorios o con leves exigencias en términos de inversión y protección ambiental. Esta situación es la que empuja, entre otras, a la mayoría de los movimientos y colectivos que luchan contra la megaminería a denunciar la complicidad estatal en la expansión de dicha actividad, considerada un renovado saqueo a los pueblos, y a cuestionar la retórica oficial de los distintos gobiernos de la región según la cual “cada país tendría enormes dotaciones de riquezas naturales, y que el deterioro no es tan grave como el que se observaría en las naciones industrializadas. Bajo esa concepción, los impactos ambientales serían menores y cuando aparecen serían manejables, y si no se puede lidiar con ellos, deberían ser aceptados como inevitables, como “sacrificios” locales necesarios para una bonanza económica nacional” (Gudynas, 2011).

En este sentido, las trágicas consecuencias socio-ambientales provocadas por la megaminería son otra de las cuestiones distintivas del nuevo ciclo minero. A las cuestiones ya referidas sobre el impacto ambiental que encierran

los procesos productivos de lixiviación deben sumarse los desplazamientos de comunidades campesinas e indígenas obligadas frecuentemente a abandonar sus tierras comunales. Esta lógica de desposesión acarrea también la pérdida de identidades y prácticas político-culturales como resultado del desarraigo padecido por aquellos que se ven obligados a migrar a los grandes centros urbanos o por quienes son “reubicados” en otras áreas rurales y condenados al empobrecimiento compulsivo debido a la expropiación de sus hábitats de reproducción vital. Asimismo la contaminación ambiental provocada por la voladura de roca, por la utilización indiscriminada del agua y de productos químicos contaminantes contribuye a la promoción de nuevas enfermedades, a la escasez creciente de agua, a la destrucción de cultivos por falta de irrigación y a la desertificación. Esto último agudiza los factores que contribuyen al calentamiento global del planeta.

Por último, debemos señalar que el creciente desarrollo de emprendimientos mineros transnacionales en América Latina y África tuvo como correlato experiencias de resistencia y de lucha protagonizadas por las poblaciones afectadas por la megaminería. El incremento generalizado de conflictos socio-ambientales durante el último lustro y contra la megaminería en particular en América Latina y África son la contracara de la creciente incidencia de este tipo de industria en el desarrollo económico de estas regiones. El caso peruano es emblemático al respecto. El incremento de las concesiones mineras en este país se acompaña de un fuerte aumento de las disputas socio-ambientales. Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de este país andino, 48% de los conflictos sociales registrados a finales de agosto de 2009 corresponden a contenciosos socio-ambientales; y 68% de este porcentaje está asociado a conflictos respecto de la actividad minera, los que, en la mayoría de los casos, refieren a disputas contra la usurpación empresaria de tierras comunales (Defensoría del Pueblo, 2009).

El carácter ilegítimo y antidemocrático de muchas de las decisiones políticas adoptadas en aras de la promoción de los emprendimientos mineros aparece vinculado a una característica que asumen con frecuencia los procesos de resistencia en América Latina y que remite a la tensión existente entre la “cuestión democrática” y la “lógica extractivista”. La promoción de inversiones mineras sin consulta a las comunidades y a las poblaciones afectadas se vio confrontada en algunos países con la organización de consultas promovidas por distintos movimientos populares con el objetivo de cotejar la efectiva legitimidad social de dichos emprendimientos. Esta dinámica democratizadora inscripta en la acción de las organizaciones prosperó en la realización de referéndums en los que se expresó el masivo rechazo de los pobladores a la minería transnacional. El resultado y la “legitimidad de hecho” de estas iniciativas contrarrestan con el estrechamiento de los espacios democráticos erosionados por el neoliberalis-

mo, reponen “desde abajo” las fronteras de la soberanía popular y consiguen, en algunos casos, postergar o directamente inviabilizar diferentes proyectos mineros. Las consultas populares de Tambogrande (Perú, 2002), de Esquel (Argentina, 2003), de Sipakapa (Guatemala, 2005) y de Usa – Kirrandara en el Valle del Cauca (Colombia, 2009) son ejemplos emblemáticos del ejercicio de esta soberanía democrática popular. En forma paralela, pero en un sentido contrario a las pulsiones democratizadoras que distinguen a estas experiencias populares, es preciso referir el incremento de la represión y de la criminalización estatal y para-estatal y la judicialización de los conflictos sociales vinculados al rechazo a los emprendimientos mineros. La política de criminalización se conjuga también con esquemas de propaganda empresarial sobre los supuestos beneficios sociales asociados al desarrollo de estos emprendimientos. Impulsada y financiada por las empresas, esta política está orientada a construir un consenso favorable a las compañías mineras entre las poblaciones locales afectadas y entre la opinión pública local y nacional. Más adelante nos referiremos a ello y a los programas y acciones involucrados bajo la llamada “responsabilidad social empresarial”.

DOS GIGANTES DEL SECTOR MINERO TRANSNACIONAL: LOS CASOS DE LA VALE Y LA ANGLOGOLD ASHANTI

El boom minero en América Latina y África

Como ya señalamos, el despuntar del siglo XXI coincidió con el inicio de un nuevo ciclo minero, que estuvo impulsado por un fuerte aumento de los precios de los principales metales del mercado mundial entre 2002 y 2008. Durante esos seis años, las principales empresas mineras obtuvieron ganancias que superaron las utilidades de cualquier otro sector económico en el mundo, incluyendo el sector farmacéutico y las telecomunicaciones (CONACAMI, 2009). En este período, América Latina se convirtió en el principal destino de inversión por parte de empresas mineras, atrayendo en el año 2007 24% de los gastos de exploración a nivel mundial y 34% de los gastos de inversión en proyectos mineros (CONACAMI, 2009). En 2008 se produjo una retracción del ritmo de las inversiones como resultado de la crisis financiera. La caída de precios, la restricción del financiamiento, la desaceleración de la economía frenaron o postergaron circunstancialmente los proyectos previstos y muchas compañías ajustaron sus operaciones, ya sea mediante la reducción de la producción o del personal. Este corto período de restricción de la actividad se prolongó hasta mediados de 2009.

Sin embargo, la dinámica del sector habrá de conocer un nuevo impulso a partir de 2010, en particular en América Latina, donde las inversiones experimentaron una nueva expansión en toda la región. Desde entonces Perú se perfiló como uno de los países más atractivos para la inversión en nuevas explotaciones mineras, ubicándose en el segundo lugar de países receptores de inversión, justo después de México (cabe señalar que en ambos países está vigente un TLC con Estados Unidos). Por otra parte, la exploración de riesgo en el sector minero de Argentina registró en 2010 un nuevo record histórico, con más de 730 mil metros de perforaciones en todo el país – 340% más que en 2003, año en que había comenzado a recuperarse esta actividad – y un incremento de 21% por sobre el último récord exploratorio, alcanzado en 2008, de 603 mil metros perforados. Similares tendencias pueden referirse en el caso colombiano. En este país, la minería “ha experimentado a partir de 2005 el cre-

cimiento más alto de toda su historia; el aumento del PIB minero en este periodo fue en promedio de 12%, muy por encima del incremento promedio del país. Así, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2010, mientras la economía en su conjunto creció 4,5%, la minería triplicó esa cifra llegando a 15%, mereciendo la consideración de ‘la locomotora que empuja el dinamismo de la economía nacional’. En la misma dirección, si en el año 2009 la minería equivalía a 5% de la producción total del país, a finales de 2010 podría significar el 9% de la economía total” (Valencia, 2010).

Similar dinámica puede referirse en el continente africano, donde la explotación de minerales es una actividad dominante y representa el primer producto de exportación de casi la mitad de los países de ese continente, que reúne un tercio de las reservas minerales a nivel mundial. El aumento de inversiones en el sector está asociado a la progresiva apertura del sector minero africano a las inversiones extranjeras, bajo la presión del Banco Mundial. A inicios de los años ‘80 Ghana fue uno de los primeros países que desreguló dicho sector, seguido por una ola liberalizadora profundizada en los años ‘90 y en la primera década del nuevo siglo que abarcó a la mayoría de los países del África subsahariana, donde se concentran la mayoría de los bienes minerales del continente. Este impulso liberalizador permitió la proliferación de legislaciones mineras llamadas de “tercera generación”, que erosionaron el control estatal preexistente sobre la actividad. El período 2005-2007 se caracterizó por un número récord de operaciones en el sector minero, que alcanzó los US\$ 158 mil millones. Como consecuencia del impacto de la crisis financiera, en 2008, las inversiones cayeron a US\$ 122 mil millones en 2009, para conocer un nuevo repunte a partir de 2010 (Performances, 2009). Así, por ejemplo, el gobierno de Angola – importante productor y exportador de petróleo pero cuyo sector minero no diamantífero había quedado relativamente estancado desde mediados de los ‘70 – ha enfatizado sus previsiones de un relanzamiento y revitalización de la explotación minera.

Es preciso también destacar, en este contexto, el incremento de la inversión directa en el exterior de empresas mineras denominadas “translatinas”. Las inversiones de las mineras latinoamericanas en el exterior han sido también motivadas por las perspectivas a largo plazo del desarrollo de los mercados de minerales y metales, sobre todo de las llamadas “economías emergentes”. El caso de la compañía Vale, de Brasil, una de las corporaciones analizadas, resulta emblemático. A pesar de los efectos de la crisis internacional que llevó a la Vale a eliminar 1.300 empleos a nivel mundial en 2009, 30% del presupuesto de inversiones de US\$ 14.200 millones se destinó a los proyectos en el exterior, localizados en Mozambique (producción de carbón), Omán (pellets), Chile (usina hidroeléctrica), Indonesia y Australia (carbón) (CEPAL, 2009).

La Vale: el gigante de hierro.

La reciente consolidación de la empresa de origen brasileño Vale como uno de los nuevos gigantes mineros es un hecho novedoso en el escenario de la minería transnacional. Con sede en la ciudad de Rio de Janeiro, la Vale tiene presencia en treinta y siete países extranjeros: Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Canadá, Estados Unidos, Barbados, Francia, Noruega, Suiza, Reino Unido, Angola, Zambia, Mozambique, Guinea¹, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Gabón, India, China, Mongolia, Omán, Cazaquistán, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia, Gana, Liberia, Australia y Nueva Caledonia. La Vale es la mayor empresa minera de América Latina y emplea actualmente más de 115 mil personas, entre profesionales propios y tercerizados. Fundada como empresa pública a partir del decreto de nacionalización de compañías mineras preexistentes dictado por el presidente Getúlio Vargas en 1942, la compañía fue privatizada en 1997 por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. En la actualidad, prácticamente la totalidad de su paquete accionario está en manos de particulares, incluyendo fondos de inversión y de pensión brasileños y extranjeros.²

La minería es una de las principales líneas de negocios de la empresa, que participa en la explotación de mineral en 21 países, distribuida de la siguiente forma: mineral de hierro (59,2%), níquel (13,6%), carbón (2,1%), aluminio (8,6%), manganeso (2,2%), cobre (4,7%), otros (1,2%). En 2010 se colocó como primera empresa exportadora de Brasil, desplazando a la Petrobras, líder del ranking desde el año 2000; según datos de la Secretaría de Comercio Exterior brasileña, las ventas externas de la Vale sumaron US\$ 24 mil millones FOB (*free on board*), 32% más que las ventas de Petrobras, que ascendieron a US\$ 18.187 millones FOB. Así, esta empresa minera fue la responsable en 2010 del 11,91% del total de las exportaciones brasileñas. Este desempeño fue resultado, principalmente, de los elevados precios del mineral de hierro en un contexto de oferta limitada en relación a la demanda de este *commodity*. Por otra parte, las ganancias de la empresa ascendieron en 2010 a US\$ 30 mil millones, triplicando el resultado obtenido en 2009

¹ En 2010 la Vale adquirió el 51% del Proyecto Simandou, considerado como uno de los mayores depósitos de mineral de hierro aún no explorados a nivel mundial, de calidad similar al explotado históricamente por la empresa en Carajás, Brasil.

² “Luego de su privatización, la mayoría de las acciones de la Vale pasó bajo control de Valepar, una sociedad financiera creada por empresas interesadas en comprar el paquete mayoritario de la Vale. En 2007, la Valepar controlaba 53,3% del capital ordinario de la empresa, siendo el BNDESPar responsable de 6,8% de las acciones. El resto estaba distribuido entre distintos inversores, de los cuales 27% eran extranjeros y 12,9% brasileños. El gobierno brasileño solo posee 3,3% de las acciones, a pesar de que goza del llamado *golden share* [...], que le otorga derecho a veto en decisiones estratégicas. La Valepar tiene la siguiente composición accionaria: el fondo de pensión Previ, que a través de la Litel Participações posee 39% de las cuotas; la Bradespar (ligada al grupo Bradesco), con 21,2%; la empresa siderúrgica japonesa Mitsui, con 18,24%; los fondos de pensión Petros, Funcef y Fundação Cesp, que poseen 10% de las cuotas y União Federal, que posee 11,51%. El fondo de pensión Previ (Caixa de Previdência do Banco do Brasil) es el accionista mayoritario de la Vale”. (I Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale: 2010).

(O Globo, 2011 a). Frente a una producción de mineral de hierro que alcanzó los 300 millones de toneladas en 2010, las proyecciones 2011 prevén un aumento que llevaría la producción a los 320 o 330 millones de toneladas.

En la misma dirección, las previsiones de inversión dan cuenta del proceso de expansión e internacionalización de la Vale. “Los nuevos proyectos de la compañía en el exterior suman al menos US\$ 9.6 mil millones en inversiones hasta 2014 y abarcan países de África, Medio Oriente, Asia y el continente americano. Con estos emprendimientos – que incluyen desde la producción de carbón hasta fertilizantes – la empresa busca diversificar sus actividades [...] Buena parte de las inversiones de la Vale en el exterior están concentradas en el continente africano, que tiene un potencial gigantesco” (O Globo, 2011 b). Dicho continente ocupa un lugar estratégico en el proceso de internacionalización de la Vale, entre otras razones, por su localización entre Asia y la región sudamericana. Ello ha contribuido como plataforma para incrementar su presencia en diferentes países de Asia, donde ya invierte en centros de distribución de mineral en Omán y en Malasia. También en Latinoamérica cuenta con importantes previsiones de inversión. En Argentina desembolsaría US\$ 1.393 millones, su mayoría en la expansión de la mina de potasio de Río Colorado; en Perú colocará US\$ 163 millones, en previsión de la expansión de la mina de roca fosfática de Bayóvar, y también invertirá US\$ 102 millones en Colombia, donde posee la mina de carbón de El Hatillo. Cabe también destacar que prevé además la inversión de US\$ 1.959 millones en Canadá en activos de níquel y fertilizantes.

La presencia de la Vale en Argentina se concentra en dos proyectos mineros ubicados en las provincias de Neuquén y Mendoza, vinculados a la extracción de potasio, mineral utilizado principalmente para la producción de fertilizantes. En la primera de estas provincias la empresa se adjudicó en 2004 una licitación para la exploración de una región de 454 kilómetros cuadrados. Este proyecto se encuentra aún en fase de estudios de viabilidad pero ya recibió cuestionamientos del Foro Permanente del Medio Ambiente de Neuquén, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de Argentina, que lucha contra los emprendimientos megamineros. El crecimiento de la Vale no solo contempla la explotación propia de yacimientos “vírgenes”. Su estrategia de expansión y diversificación productiva conllevó la reciente adquisición de otros proyectos mineros desarrollados por distintas corporaciones transnacionales. Este es el caso del yacimiento de Río Colorado, en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza, que fue adquirido a la multinacional Río Tinto. El proyecto contempla la explotación de la mina y estará asociado a la construcción de una ferrovía y de una usina de generación de energía eléctrica. Al igual que en el caso de Neuquén, la concesión de Río Colorado encontró tempranamente la oposición de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, junto a otras organizaciones sociales.

En Colombia, la empresa produce carbón a través de su subsidiaria Vale Carbón Colombia, en la mina El Hatillo y el depósito de Cerro Largo, en estado de exploración. La Vale posee 100% del capital de la Sociedad Portuaria Río Córdoba y participación minoritaria en Ferrocarriles del Norte de Colombia SA.

La Vale participa activamente en el proceso de expansión de las concesiones mineras en Perú, que tuvieron un nuevo impulso a mediados de 2009 y que hoy representan 15% del territorio nacional. “A partir de 2003 la empresa minera Misiki Mayo S.A.C., subsidiaria de la Vale, inicia bajo el nombre ‘La Morada’ un emprendimiento minero en Cajamarca, Perú” (1º Encuentro Internacional dos Atingidos pela Vale, 2010) que suscitará la oposición y movilización de los pobladores de la quebrada de Huaynamarca y que referiremos más adelante. También en este país andino la Vale comenzó a operar recientemente la mina de fosfatos Bayóvar, uno de los mayores depósitos de roca fosfática de América del Sur, situada en el desierto de Sechura. Se trata de un complejo de producción que incluye una mina, una planta concentradora con capacidad de procesamiento de 592,8 toneladas métricas al año y una carretera industrial de 32 kilómetros. El proyecto demandó una inversión de US\$ 566 millones y producirá materiales para la actividad agrícola. La mina fue inaugurada en agosto de 2010 por el presidente Alan García y producirá un millón de toneladas de roca fosfórica en su primer año de funcionamiento. El complejo minero de Bayóvar comprende también un puerto cuya construcción estuvo en manos de la multinacional brasileña Odebrecht y que permite exportar hasta 7.9 millones de toneladas de roca fosfórica.

Como ya señalamos, el continente africano ocupa un lugar privilegiado en la estrategia de internacionalización de la Vale. Esta dinámica abarca proyectos de exploración en curso y otros emprendimientos ya en explotación. Entre los primeros es preciso referir al caso de Angola, donde las actividades de la Vale se concentran esencialmente en la etapa exploratoria para la identificación de áreas con potencial en cobre y níquel. La presencia de la Vale en Angola, con una oficina en Luanda, se articula con los intereses de otras empresas transnacionales de origen brasileño cuya presencia en dicho país se ha consolidado impulsada por una activa política diplomática y comercial practicada por el gobierno del presidente Lula da Silva durante sus dos mandatos³. El grupo Odebrecht se

³ La intensificación de la actividad diplomático-comercial de Brasil en Angola se encuentra también asociada a la presunción y posterior descubrimiento de reservas de petróleo en la plataforma marítima angolana (similares a las representadas por el Pré-Sal brasileño). La Petrobras participó en las licitaciones realizadas por el gobierno del país africano por intermedio de la empresa nacional de petróleos Sonangol, y se encuentra actualmente realizando exploraciones en asociación con esa y otras empresas en los distintas áreas de la plataforma marítima que se extiende entre las desembocaduras de los ríos Congo y Kuanza (80 kilómetros). Petrobras ha anunciado el descubrimiento de petróleo en el Sector 15/06 donde la compañía brasileña posee participación compartida con otras empresas multinacionales petrolíferas (Agência Petrobras de Notícias, 2010). Para mayor información sobre la evolución de la industria petrolera en Angola y sobre el comportamiento de las compañías transnacionales en dicho país ver Conferência Episcopal de Angola e São Tomé 2008 *Transparência no sector petrolífero angolano 2002-2006* (Luanda, CEIP).

transformó en el mayor empleador privado en el país angoleño, con actividades que incluyen la producción de alimentos y etanol, oficinas comerciales, fábricas y supermercados. Asimismo, en 2010 10% del PBI de Angola correspondió a la actividad productiva y comercial de empresas brasileñas (Financial Times, 2010). En Zambia, la empresa avanza en el desarrollo de una mina de cobre y, en Samandou, Guinea, la Vale trabaja en la implantación del mayor proyecto de hierro integrado con infraestructura del continente. En este último país, la compañía pretende producir 15 millones de toneladas de mineral de hierro en la primera fase (a partir de 2012), lo que demandará una inversión de US\$ 681 millones en el transcurso de 2011.

El proyecto en marcha más importante en el continente africano de la Vale es el de la explotación de la mina de carbón de Moatize, en la provincia de Tete, Mozambique, al noroeste de dicho país. El desarrollo de este emprendimiento por Rio Doce Mozambique se prolonga en la construcción de un ferrocarril, de un puerto y de una central termoeléctrica y está destinado a explotar a partir de 2011 el mayor yacimiento mundial de carbón. La promoción de los planes empresariales supone la “relocalización” de numerosas comunidades campesinas que habitan la región hacia nuevos emplazamientos donde el acceso de las y los agricultores/as al agua y sus posibilidades de producción de alimentos para el autosustento y la comercialización, entre otras cuestiones vitales, no están garantizadas. En Mozambique la Vale también posee el proyecto Evate para la producción de roca fosfática que se encuentra actualmente en estudio de pre-factibilidad.

La AngloGold Ashanti: la minería dorada.

AngloGold Ashanti (AGA), empresa de origen sudafricano e inglés, es la segunda productora de oro del mundo. Tiene presencia en los 23 países antes mencionados en 5 continentes (África, América, Asia, Europa y Oceanía). Junto con la Anglo Platinum y la productora de diamantes De Beers, la AGA es subsidiaria de la británica Anglo American, que detenta 42% de su paquete accionario. Su activo principal es el oro, pero también explota e invierte en otro tipo de minerales.

En América Latina, las actividades de explotación de oro de la AGA se concentran en tres países: Argentina, Colombia y Brasil (Serra Grande y Brasil Mineração). La producción de oro en el continente latinoamericano representa 13% de la producción del grupo empresario. Si se considera la producción de sus yacimientos en Canadá y Estados Unidos, este porcentaje se eleva a 19% y es responsable de 30% del monto de las operaciones financieras de la empresa. En los tres países de Sudamérica los programas de exploración fueron expandidos recientemente.

En Argentina, la explotación se concentra en el yacimiento de Cerro Vanguardia, situado cerca de la localidad Puerto San Julián, en la provincia de Santa

Cruz, en el sur del país. La AngloGold Ashanti posee 92,5% de las acciones de este yacimiento y la empresa estatal santacruceña Fomicruz el restante 7,5%. La mina comprende un área de 514 kilómetros cuadrados, donde se remueven anualmente 25 millones de toneladas de roca para obtener una producción de oro que asciende actualmente a 220.000 onzas anuales. Para obtener este resultado la minera debe literalmente mover montañas. Las operaciones de minería consisten en múltiples voladuras a cielo abierto para obtener la roca cuyo procesamiento arroja un resultado de 6,5 gramos de oro por tonelada.

En el contexto de aumento de las inversiones mineras en Colombia desde 2005, AGA es hoy el principal prospector minero en dicho país. La intensa actividad prospectiva sobre 6,32 millones de hectáreas realizada entre 2004 y 2007 por la empresa en asociación con Mineros S.A., Glencore y B2Gold Corp, arrojó como resultado provisorio el descubrimiento de dos importantes yacimientos auríferos: uno de ellos es La Colosa (100% propiedad de AGA), situado en el departamento de Tolima, que posee reservas de oro estimadas en más de 12 millones de onzas; y el otro Gramalote, en el departamento de Antioquia (negocio a riesgo compartido con B2Gold Corp, empresa canadiense si bien la AngloGold es propietaria de 51% del paquete accionario) (AngloGold Ashanti, 2007). . AGA es también accionista del proyecto carbonífero de El Cerrejón. La explotación de la mina aurífera La Colosa se encuentra suspendida a causa de un litigio jurídico. En 2008 distintas organizaciones elevaron un pedido a la autoridad ambiental regional solicitando la interrupción de las actividades mineras a causa del enorme volumen de agua consumido. Dicha solicitud fue considerada favorablemente por el Poder Judicial, quien decidió interrumpir el proyecto. Según cálculos de organizaciones socioambientales, el gasto de agua en un año de producción de La Colosa es equivalente al consumo de la población colombiana durante ciento cuarenta y nueve años (Fernández/ Valencia, 2010). La continuidad de la explotación se encuentra pendiente del otorgamiento de un permiso para uso de aguas por parte de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima). En caso de lograrlo, la empresa podrá retomar los trabajos de exploración en una mina de oro cuyas reservas se calculan en más de 12 millones de onzas, con capacidad de producción de 700.000 onzas anuales.

ESTRATEGIAS EMPRESARIAS PARA ASEGURAR EL CONTROL SOCIOPOLÍTICO DE LOS TERRITORIOS Y LAS POBLACIONES

Como consecuencia de sus negativos impactos socioambientales, sanitarios, económicos, políticos y culturales, la minería a cielo abierto ha despertado un creciente rechazo social, particularmente en las zonas directamente afectadas por los emprendimientos mineros. Frente a ello las empresas del sector han invertido ingentes recursos en el desarrollo de estrategias de gobernabilidad social que, con distintas modalidades, incluso bajo los programas de responsabilidad social empresaria, se orientan a controlar y neutralizar las resistencias y promover voceros y corrientes de opinión favorables a la megaminería (políticos, profesionales, científicos, periodistas) incidiendo de esta manera en la construcción de la opinión pública. El discurso de la “minería responsable” es distintivo de esta estrategia mediática empresaria. La idea de “responsabilidad social” busca entonces la legitimación del modelo extractivista exportador en general, y minero en particular, pero oculta de manera sistemática los graves y profundos impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos. “El modelo extractivo se presenta como una teleología – finalidad lanzada hacia el futuro -, mientras traza también una nueva cartografía planetaria en clave minera [...] Este *mundo-cantera* se articula en una retórica temporal dominante, la del “desarrollo sustentable”, que produce fortísimas intervenciones en la cultura, intervenciones en expansión y diseminación aceleradas que colonizan las representaciones sociales y sus legitimidades, produce verosimilitudes, suscita e incita deseos [...] Este discurso homogeneizante articula condensadores de sentido en la narrativa promesante del “desarrollo sustentable”, con la que gestiona y busca modelar y modular las proyecciones de futuro “gracias a la minería”, interviniendo memorias y significaciones del presente” (Antonelli, 2009).

Por otro lado, la articulación de vínculos cada vez más estrechos con ámbitos científico-universitarios públicos, a través del financiamiento privado minero para promover investigaciones o informes técnicos favorables a sus intereses, es otra de las estrategias privilegiadas de las transnacionales del sector, orientada a la “colonización” de la producción científica y de la opinión de los expertos por parte de los intereses privados y se complementa con un

sistemático trabajo de *lobby* que permite manipular los resultados de estudios sobre impacto ambiental de los emprendimientos en una perspectiva favorable a los intereses mineros.

En el mismo sentido, las corporaciones mineras desarrollan un conjunto de estrategias para promover y consolidar su influencia e intervención sobre la definición de las políticas públicas y las estructuras de la autoridad público-estatal local y regional (gobiernos, legislativos, justicia, burocracia), donde muchas veces los emprendimientos alcanzan una magnitud económica que contrasta con la pobreza y precariedad social de los territorios. Similares métodos tienen lugar a nivel del Estado nacional también, en el marco de los procesos de desestatización de la regulación social, privatización de la autoridad pública, recolonización y desdemocratización que caracterizan a la mundialización neoliberal y sus consecuencias sobre la soberanía democrática de los pueblos.

El caso de la Vale resulta emblemático en la consideración de estas políticas de “governabilidad social”. Al igual que la mayoría de las transnacionales del sector, una de las estrategias distintivas es la difusión del discurso de la promoción de empleo local ligado al desarrollo de los emprendimientos megamineros, buscando asociar la producción minera a la creación de numerosos puestos de trabajo y provocar la adhesión de los pobladores de las zonas involucradas por las explotaciones, a menudo afectadas por altas tasas de desempleo. En la lógica del discurso empresarial, el “círculo virtuoso” del empleo minero se complementa también con un aumento de la masa salarial, de la renta familiar y de la recaudación impositiva en las comunidades. La manipulación de este imaginario por parte de las empresas minimiza o simplemente oculta el hecho de que el actual patrón tecnológico minero requiere un bajo nivel de ocupación de mano de obra y altamente calificada en comparación con la minería de socavón, razón por la cual muchos de los empleados provienen de fuera de las localidades e, incluso, del país anfitrión. De esta manera, si bien en la etapa de construcción de la infraestructura de los yacimientos la mano de obra requerida puede alcanzar niveles importantes, los trabajadores ocupados en estas tareas no son por lo general recontratados luego de la finalización de los trabajos.

Por otra parte, a través de la Fundación Vale, la empresa desarrolla y financia diversos programas destinados a promover la “sustentabilidad” de la minería en los territorios donde actúa. Con apoyo financiero de órganos gubernamentales y el involucramiento de universidades y organizaciones del llamado “tercer sector” la empresa impulsa iniciativas tendientes a promover los derechos humanos, la gestión territorial y socioambiental de las comunidades y a difundir el discurso de la “ética minera”. Asimismo la Vale asigna particular relevancia a las políticas llamadas de “desarrollo integral de la juventud” vehi-

culizadas a través de programas educativos para adolescentes con el objetivo de promover el desarrollo personal, social y educativo a través de la educación afectiva-sexual y de la formación de agentes de desarrollo territorial. Las iniciativas de “intervención social” sobre las poblaciones indígenas afectadas en sus territorios por las explotaciones mineras tienen una importancia particular para la empresa: en 2009 más de 5.500 indígenas de los estados de Pará, Maranhão y Minas Gerais, en Brasil, fueron objeto de distintos programas de “responsabilidad social empresarial”. Según datos divulgados en el sitio Internet de la empresa entre 2007 y 2009, 169.309 personas “fueron beneficiadas por programas de salud y asistencia social” de la Vale.

De manera complementaria, la empresa Vale Florestar S.A., creada en 2007 y consolidada en 2010 con el aporte de fondos provenientes del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), de los fondos de pensión de los empleados del banco Caixa Econômica Federal (Funcef) y de la Petrobras (Petros), promueve la reforestación con especies nativas y “exóticas” de áreas degradadas. Esta empresa subsidiaria de la Vale actúa en áreas de la región amazónica donde la expansión de actividades “productivas” acarrea el desmonte de la vegetación. El objetivo de esta iniciativa, que en 2010 reforestó 95 mil hectáreas de floresta tropical desmontada, es el de incentivar emprendimientos económicos forestales de largo plazo con base “sustentable”.

Es preciso referir también a la reciente campaña promovida por la empresa de asistencia a las víctimas y de reconstrucción de las ciudades afectadas por las recientes inundaciones y deslaves ocasionados por las lluvias en enero de 2011 en la región serrana de Rio de Janeiro. El contenido de la iniciativa invoca además la “responsabilidad social” de los trabajadores de la empresa, quienes son convocados, junto al resto de la ciudadanía, a donar fondos y depositarlos en una cuenta bancaria creada por la Vale. El “gigante minero” asume el compromiso de donar dos reales por cada uno depositado por los contribuyentes. También en el caso de la Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), *joint venture* conformada por la Vale y Thyssen Krupp, la política de responsabilidad social empresarial se ha traducido en financiamiento para proyectos de salud y educación en el área local afectada por el emprendimiento – reacondicionamiento del Hospital Pedro II; centro educacional en Iataguai). Sobre estas políticas se ha señalado críticamente que, además de recibir un financiamiento del BNDES para llevarlas adelante, su monto e impacto resulta muy inferior a los costos sociales que ocasiona la actividad de la empresa sobre la vida de los pescadores, la generación de renta en la región y la salud pública (1° Encuentro Internacional dos Atingidos pela Vale, 2010). Una consideración que puede extenderse al conjunto de las políticas de responsabilidad empresarial e intervención social desarrolladas por la empresa.

La política corporativa de “governabilidad social” y, particularmente, la circunscripta bajo la llamada “responsabilidad social empresarial” viene siendo crecientemente cuestionada y denunciada por diferentes colectivos y movimientos sociales que resisten los emprendimientos de la Vale. Así, por ejemplo, respecto del emprendimiento de la Vale en Mozambique se ha señalado que la política empresarial de responsabilidad social resulta sólo una acción publicitaria falsa y engañosa en tanto no existe mecanismo de consulta y participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en las decisiones empresarias ni la promocionada financiación de la rehabilitación del Hospital Provincial de Tete ha sido sostenida principalmente por la Vale (1° Encuentro Internacional dos Atingidos pela Vale, 2010). Por otro lado, un informe de monitoreo de sus actividades mineras elaborado por el Centro Mozambiqueño de Integridad Pública y dado a conocer en 2010 señala que de noviembre de 2009 a abril de 2010 la Vale expulsó cerca de 760 familias campesinas de sus comunidades para abrir las minas de carbón. Para ello la empresa dividió a las familias entre rurales y semi-urbanas, utilizando criterios diferenciados para los reasentamientos de las mismas. Las familias rurales fueron asentadas a 40 kms. de sus comunidades de origen y las consideradas semi-urbanas fueron “colocadas” en las proximidades de la ciudad de Moatize (Selemane, 2010). Así, la política empresarial de responsabilidad social resulta fundamentalmente una acción de *lobby* y propaganda orientada a justificar y encubrir los desplazamientos de comunidades, la previsible devastación ambiental de la zona y el creciente poder e influencia ganado por la empresa sobre la definición de las políticas públicas y el gobierno de la ciudad de Moatize y la provincia de Tete.

Por otra parte, la política de “responsabilidad empresarial” de la AGA se sustenta en el eslogan de “ciudadanía corporativa, responsable y ética”. Desde 2006 desarrolla distintas iniciativas y programas tendientes a legitimar su implantación productiva que tiene significativos impactos ambientales. El programa “Empresa Abierta” busca sensibilizar a la población promoviendo visitas a la mina de docentes, estudiantes de diferentes niveles, representantes de la comunidad y público en general. “A la vez que suscribe la misión y valores de AngloGold Ashanti, Cerro Vanguardia ha desarrollado sus propios principios para expresar su compromiso particular con los accionistas, empleados y la comunidad afectada por la operación. Su misión incluye el objetivo de interactuar con la comunidad que la rodea y su visión expresa el deseo de Cerro Vanguardia de que esa comunidad la reconozca, entre otras cosas, por su historial en materia de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. Los empleados se informan sobre las políticas y programas comunitarios de la mina principalmente a través de boletines informativos y otras publicaciones internas” (AGA, 2011). La mina lleva a cabo un plan sistemático de rela-

ción con los medios de comunicación y un sistema de reuniones informativas regulares para informar a las comunidades circundantes sobre la operación y su ciclo de vida. También desarrolla actividades que la empresa denomina de “inversión social” focalizadas en educación, desarrollo comunitario, atención médica, medio ambiente, arte y cultura. En el marco de estas iniciativas, la empresa financió la ampliación y remodelación de las instalaciones del Club Atlético de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, Argentina.

LUCHAS Y RESISTENCIAS SOCIALES CONTRA LA VALE Y LA AGA

“El agua vale más que el oro. No a la megaminería”.

Esta consigna que sirve de título se ha transformado, en los últimos años, en un denominador común a las múltiples y extendidas experiencias de resistencia al desarrollo de la megaminería transnacional en América Latina. Desde las selvas mesoamericanas a las estribaciones del sur patagónico y de la región central de los andes peruanos a la floresta amazónica, la expansión de las inversiones mineras se vio confrontada a un intenso proceso de resistencias sociales que asumió una dimensión regional. En el pasado reciente, dos fechas y experiencias emblemáticas signaron el fortalecimiento y la expansión de estos movimientos: la creación en 1999 en Perú de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), surgida de las luchas de las comunidades contra la minería, y que es hoy uno de los centros de la organización andina de los movimientos indígenas. En Argentina, la resistencia a la explotación minera dio vida a las asambleas ambientales que en 2006 crearon la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Estos dos ejemplos son expresiones de procesos organizativos que se multiplicaron en los últimos años y que han contribuido a visibilizar las consecuencias socioambientales provocadas por el actual modelo de desarrollo y a postular la necesidad de construcción de nuevos horizontes civilizatorios, contra y más allá de la lógica del capital. En relación a esta cuestión es importante subrayar el significativo aporte que hacen los movimientos indígenas del área andina con la formulación de la propuesta del “Buen Vivir/Bien Vivir” o “*Sumak kawsay*” en el ámbito del cuestionamiento a la retórica del desarrollo y del debate sobre las prácticas descoloniales y emancipatorias⁴. Pero esta cuestión excede el obje-

⁴ En relación al concepto de Buen Vivir/Bien Vivir o Sumak kawsay y los debates en curso sobre esta problemática pueden referirse, entre otras, las siguientes contribuciones: CAOÍ 2010 Buen Vivir. Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas (Lima: CAOÍ); Gudynas, Eduardo 2011 “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo” en América Latina en movimiento (Quito:ALAI), No. 462, febrero; Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia 2009 El Vivir Bien como respuesta a la crisis global (La Paz: MRE); Quijano, Anibal 2010 ¿Bien Vivir?: entre el “desarrollo” y la descolonialidad del poder (Lima:mimeo)

tivo de este trabajo. A continuación presentamos sintéticamente, en este último punto, algunos de los procesos y estrategias de resistencia y lucha más recientes contra los emprendimientos mineros de la Vale y la AGA. Por último, nos referiremos a algunas experiencias de carácter regional que tuvieron lugar en los finales de 2010 y principios de 2011 y que dan cuenta del proceso de fortalecimiento de solidaridades e iniciativas de carácter continental en torno a la lucha contra la megaminería, contra el “desarrollo extractivista” y contra el cambio climático.

En el caso de Argentina, el año 2010 resultó emblemático para la lucha contra la megaminería. Luego de varios años de protestas, acciones y un sostenido trabajo de presión parlamentario por parte de las organizaciones sociales, en particular de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), el senado aprobó en septiembre la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y la Zona Periglacial, que ya tenía media sanción de diputados. Una ley similar a la aprobada había sido votada por el parlamento en 2008 pero había quedado sin efecto a causa del veto presidencial. Esta última decisión provocó encendidas críticas de parte de un amplio arco de organizaciones sociales. Durante el debate reciente de la nueva ley, uno de los puntos polémicos fue la consideración de la zona periglacial. Mientras que los representantes de las provincias mineras intentaron hacer prevalecer una definición restringida de esta cuestión (glaciares “descubiertos y cubiertos y, dentro del ambiente periglacial, los glaciares de escombros”), favorable a los intereses mineros, la posición triunfante impuso un reconocimiento más abarcativo de la zona periglacial (“el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”) que acota la actividad productiva de las empresas, estableciendo un límite más extendido para las explotaciones. La sanción de la ley fue acompañada de una amplia movilización que tuvo lugar frente al Congreso convocada por los movimientos sociales, agrupaciones indígenas del norte y del sur del país, de las provincias de Buenos Aires y del litoral, y decenas de colectivos en lucha contra la contaminación, destrucción territorial y saqueo de los bienes comunes, federados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y la Asamblea de “El Otro Bicentenario”. Estas organizaciones instalaron una gran carpa frente al Parlamento, que sirvió como punto de encuentro y organización de distintos debates y actividades durante la semana de la discusión legislativa. La aprobación de esta ley abrió, sin embargo, una batalla jurídica que acaba de iniciarse. Los abogados de las empresas multinacionales, con el apoyo de gobernadores y legisladores de las provincias que promueven la minería a cielo abierto, han interpuesto recursos judiciales contra su vigencia. En la provincia de San Juan, distrito emblemático en la lucha anti-minera en defensa de los glaciares y contra la presencia de la multinacional Barrick Gold, que explota la mina de Veladero-Pascua Lama, un juez federal dictaminó que la ley no puede

aplicarse porque viola el principio de soberanía provincial sobre los recursos naturales. Una prueba más del peso que estas grandes corporaciones ejercen sobre las estructuras de gobierno locales y provinciales.

En la provincia de Mendoza, otra disputa jurídica enfrenta al gobierno provincial con organizaciones sociales en torno a la explotación de la mina de potasio de Río Colorado, propiedad de la Vale. El Consejo Provincial del Ambiente, integrado por Foro Participación Ciudadana, Fundación Cullunche, Oikos Red Ambiental y Asamblea Popular por el Agua, interpuso un reclamo ante el gobernador en el que se informa de las anomalías detectadas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Potasio Río Colorado y solicita que este proyecto continúe en evaluación. Los colectivos ambientalistas sostienen que el Código de Minería clasifica al potasio como sustancia metalífera y que para ese tipo de emprendimientos la ley establece que la Declaración de Impacto Ambiental debe ser ratificada por la legislatura provincial. El proyecto de la Vale en la provincia cuyana despierta así una cerrada oposición de distintos movimientos sociales que han logrado frenar provisoriamente la extracción de potasio con el argumento de que el principal daño de este proyecto es el potencial riesgo de salinización del río Colorado, una de las cuencas más importantes de la Argentina (I Encuentro Internacional dos Atingidos pela Vale, 2010). También en esta provincia la resistencia contra la ampliación de los proyectos mineros cobró un nuevo impulso en el mes de octubre de 2010 en ocasión de la asamblea popular convocada para repudiar los proyectos de la Coro Mining (Minera San Jorge), que pretende lograr la aprobación legislativa del Proyecto San Jorge. La negativa de las autoridades provinciales a atender estos reclamos populares estimularon la realización de una masiva marcha a la legislatura provincial en febrero de 2011 organizada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) y la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes que culminó con la realización de una asamblea popular en el hemiciclo de la legislatura, donde miles de manifestantes se pronunciaron contra la minería contaminante. Pocas semanas después, durante el mes de marzo, estas luchas se expresaron nuevamente en la masiva marcha que invadió la tradicional fiesta del Carrousel de la Vendimia en la ciudad capital y en distintos “piquetes informativos” que tuvieron lugar en las localidades de Uspallata, San Carlos, Tunuyán y General Alvear de esta provincia argentina.

Si bien los reclamos de los trabajadores mineros son menos extendidos que las luchas ambientalistas estos también estuvieron presentes en algunos casos. En 2006 trabajadores de la mina de oro de Cerro Vanguardia, de la AGA, protagonizaron un paro por reclamo salarial acompañado de sabotaje a la producción que resultó exitoso en sus demandas por aumentos salariales. Una mención particular exige la emblemática resistencia durante 2010 de la Asam-

blea El Algarrobo y de Vecinos Autoconvocados por la Vida de la localidad de Andalgalá, Catamarca, quienes repudiaron con acciones directas (escraches, cortes de ruta, etc.) la presencia en esa provincia argentina de las empresas mineras Alumbrera (Ymad - UTE) y Agua Rica (Yamana Gold).

Por otra parte, en Colombia, el recambio presidencial en 2010 suscitó en algunos sectores sociales moderadas expectativas de cambio respecto a la política minera promovida en los años recientes por el gobierno de Álvaro Uribe. A poco de asumir, las definiciones del nuevo presidente Juan Manuel Santos frustraron rápidamente estas esperanzas y vinieron a ratificar que la explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas “locomotoras” de la economía. Esta orientación se materializó en un aumento de las autorizaciones para proyectos de prospección y de explotación minera. Distintas organizaciones sociales e indígenas y autoridades legislativas de la región del Cauca han denunciado que esta región va camino a convertirse en una mina a cielo abierto sin ningún control si se considera que aproximadamente 56% de su territorio sería entregado en concesiones mineras a las transnacionales. También la presencia de la AngloGold Ashanti y su proyecto La Colosa, en Tolima, fueron denunciados por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME). En una declaración sobre la cuestión, firmada por más de cuarenta organizaciones sociales y ambientalistas, las mismas denunciaron el aumento de la militarización y los asesinatos de líderes comunitarios vinculados a la expansión de proyectos mineros. El pronunciamiento denuncia la presencia en Colombia de la AGA, empresa acusada por la organización internacional Human Rights Watch de financiar grupos paramilitares en la República Democrática del Congo y de asediar y perseguir a las comunidades que obstaculizan la entrada de sus proyectos mineros. Señala también la existencia de denuncias que vinculan a esta empresa con el asesinato de líderes en el país y subraya su responsabilidad en la división de comunidades para favorecer sus intereses. Según el informe de “gobernanza” de la propia empresa solamente en el año 2008 se gastaron cerca de 330 mil millones de pesos en el proyecto de La Colosa que no contemplaron recursos para la preservación ambiental. Las comunidades han señalado que el proyecto de La Colosa acabará con importantísimas fuentes de agua superficial y subterránea, significará el desplazamiento de comunidades enteras y la desarticulación definitiva del tejido social originario de la región. También denuncian los pobladores la compra por parte de la empresa de terrenos a través de testaferros. Las organizaciones firmantes exigen la investigación de los procedimientos y prácticas de AngloGold Ashanti en las más de 300.000 hectáreas sobre las que reconoce tener títulos; el respeto a la voluntad popular de las comunidades que ya han expresado su negativa rotunda a la entrada de los

proyectos mineros de esta empresa y la suspensión de todas sus actividades a lo largo y ancho del país, hasta tanto no haya un esclarecimiento sobre las denuncias realizadas.

En el caso de Perú, también el emprendimiento minero llevado adelante por una subsidiaria de la Vale en Cajamarca ha sido crecientemente cuestionado. En este sentido, en 2007 los pobladores de la localidad realizaron una masiva “Marcha del Sacrificio” que desató y profundizó una política de criminalización del movimiento, represión ilegal y persecución judicial de los referentes comunitarios. Ya en 2006 una Comisión oficial de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca había denunciado la presencia de grupos de civiles armados encapuchados protegiendo las instalaciones de la empresa; y en los últimos años ésta ha sido cuestionada por promover, con el auspicio del gobierno nacional, la formación de grupos de seguridad civiles y la entrega de armamento (I° Encuentro Internacional dos Atingidos pela Vale, 2010).

Por otra parte, desde mediados de 2010, fecha de inicio de las actividades de extracción en la mina de fosfato de Bayóvar, Sechura, también en Perú, la Vale ha sido objeto de distintas denuncias y acciones. Jóvenes encuadrados en el sindicato de la construcción civil de la provincia de Sechura organizaron protestas frente a la oficina de la empresa Vale en Piura en demanda de puestos de trabajo y denunciaron que la empresa incumplió lo estipulado en el contrato de concesión en el sentido de dar prioridad a la contratación de mano de obra de la zona. Otra denuncia contra la Vale involucra a la empresa en un caso de fraude al fisco peruano. A poco de iniciar la explotación de fosfato la Vale vendió 60% de sus acciones a las empresas Mosaic (estadounidense, US\$ 385 millones, 35%) y Mitsui (US\$ 275 millones, 25%). Según las denuncias realizadas por distintos parlamentarios peruanos la empresa brasileña violó la ley al realizar dicha transacción en Holanda, y no en la jurisdicción legal de la provincia de Sechura según lo estipulado por la ley. Con esta operación la Vale evadió su responsabilidad fiscal en Perú, donde el Estado peruano dejó de percibir el impuesto a las ganancias de capital que ascenderían a US\$ 112 millones.

También en Mozambique los emprendimientos de la Vale han despertado serios cuestionamientos y resistencias por parte de organizaciones campesinas, de las familias afectadas y de otros sectores de la sociedad civil. En este país del sur de África la Asociación de Apoyo y Asistencia Jurídica a las Comunidades ha criticado el trato que la Vale dispensa al pueblo mozambiqueño, calificando el comportamiento de la multinacional brasileña como un “crimen hediondo y vergüenza para un Estado de derecho” (Selemane, 2010). La Associação denunció, igualmente, el estrecho vínculo entre la Vale y las autoridades nacionales, toda vez que Roger Agnelli, ex presidente ejecutivo de la Vale, es asimismo asesor en relaciones internacionales del jefe de Estado

mozambiqueño (Selemane, 2010). En septiembre de 2010, las importantes manifestaciones campesinas que tuvieron lugar en Maputo para reclamar contra el aumento del precio de los alimentos fueron violentamente reprimidas. Frente a ello, los dirigentes de la União Nacional de Camponenes (UNAC) han denunciado insistentemente que la promoción de proyectos mineros como el de Moatize, en tanto propician el desplazamiento masivo de agricultores y atentan contra la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, son unos de los responsables del aumento de los precios internos de los alimentos. Los conflictos contra la explotación minera no se restringen al ámbito rural y al movimiento campesino. Valga mencionar, por ejemplo, que organizaciones ambientalistas de Mozambique promovieron un petitorio que recolectó 14.000 firmas en repudio al proyecto minero de extracción de aluminio ubicado en un barrio residencial a 17 kilómetros de Maputo impulsado por la empresa Mozal, cuyo principal accionista es la compañía BHP Billiton.

Luchas recientes, una conclusión provisoria.

Tanto en América Latina como en África las acciones locales contra la megaminería contaminante contribuyen a consolidar los procesos de convergencia regional contra la dinámica recolonizadora y contaminante de estos emprendimientos. Concluimos este trabajo haciendo una breve referencia a distintas acciones que expresan la maduración de experiencias de solidaridad transnacional de los movimientos socioambientalistas durante el año 2010 y principios de 2011.

En la primera mitad de ese año dos eventos realizados en la región sudamericana pusieron de manifiesto la dimensión de la lucha contra el extractivismo y la industria minera en particular, subrayando el vínculo existente entre este tipo de actividad y el calentamiento global del planeta. En el mes de abril tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, organizada a instancias del gobierno boliviano con el apoyo de diversos movimientos sociales latinoamericanos. Dicho encuentro contó con la participación de numerosas organizaciones que combaten la minería transnacional y selló un acuerdo de las organizaciones participantes para organizar un referéndum internacional sobre justicia climática en 2011.

Por otra parte, los cuestionamientos a la Vale maduraron en la creación del Encontro dos Atingidos pela Vale, responsable de la convocatoria al “Primeiro Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale”, que contó con el auspicio y participación de numerosas organizaciones y movimientos sociales brasileños, latinoamericanos y de otros continentes. Esta reunión se realizó a mediados de abril de 2010 en Rio de Janeiro, Brasil, con el objetivo de nuclear en el debate y la acción a organizaciones sociales de los cinco continentes afectadas

por la acción de la compañía minera, en especial a colectivos de Canadá, Chile, Argentina, Guatemala, Perú y Mozambique. Más de 160 participantes de 80 organizaciones y movimientos sociales y sindicales de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Italia, Mozambique, Nueva Caledonia, Perú y Taiwán intercambiaron y debatieron sobre sus acciones contra los efectos de los emprendimientos de la Vale. El Encuentro denunció que, amparada en una imagen ambientalista “verde y amarilla”, la Vale destruye la selva, el ecosistema y a comunidades enteras. En la declaración final las organizaciones firmantes reivindican la vida y el “buen vivir” y se comprometen a fortalecer el monitoreo y la denuncia de cada iniciativa de la Vale, ampliando la lucha, la resistencia y la construcción de alternativas al modelo explotador y depredador. Asimismo convocaron a las comunidades que padecen los grandes emprendimientos de la minera, a la sociedad civil, a los trabajadores y a las trabajadoras de la Vale, a movimientos y organizaciones sociales, a pastorales sociales, a estudiantes y profesores a participar en la construcción de este nuevo movimiento de lucha internacional de enfrentamiento a la Vale bajo la consigna popularizada por la Vía Campesina de “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”.

Unos meses más tarde, en África, tuvo lugar la 12^a. Reunión Estratégica Anual de la Iniciativa Africana sobre Minería, Ambiente y Sociedad (AIMES, por sus siglas en inglés), con la participación de representantes de República Democrática de Congo, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica y Zimbabwe, Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos (julio de 2010, en Bamako, Mali). En momentos en que distintos gobiernos de países de este continente promueven políticas de desregulación y liberalización de sus regímenes mineros con el auspicio de la Unión Africana, esta reunión estuvo abocada a discutir la crisis financiera y los actuales esfuerzos de recuperación económica, el intercambio internacional de *commodities*, y los recursos financieros internacionales para la industria minera global, y sus impactos en las economías minero-dependientes de África. En relación a ello se señaló que la crisis financiera ha provocado efectos devastadores en las economías de los países: pérdida de puestos de trabajo, colapso de la actividad económica y pérdida de ingresos estatales por algunos minerales, en particular cobre y diamantes. Los actuales regímenes mineros proveen demasiados privilegios a las empresas transnacionales, ya que permiten la rápida salida de capitales del continente. Los privilegios asumen varias formas: a) acceso y control irrestricto de recursos minerales, b) beneficios impositivos, c) baja participación accionaria estatal, d) vigencia por muchos años de los derechos mineros, e) contratos abusivos amparados en acuerdos bilaterales de inversión, y f) mecanismos voluntarios de rendición y entrega de información. Estos pri-

vilegios constituyen un componente importante del trágico balance social de la minería en África. La situación se completa con un escaso intercambio de información, débiles capacidades institucionales para monitorear y prevenir la evasión y elusión fiscal y abusos ambientales y de derechos humanos. La crisis financiera y económica expuso las debilidades inherentes a la estructura de las economías africanas y su sobre-dependencia de la exigua canasta de *commodities*. Al mismo tiempo, la crisis evidenció las flaquezas del modelo económico neoliberal. Los participantes observaron que los gobiernos africanos recurrieron nuevamente a las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, para encontrar soluciones a la crisis de la que estas mismas instituciones son responsables. Todo ello fue interpretado como razones de la urgente necesidad de reexaminar los regímenes de comercio de minerales y la estructura económica de los países minero-dependientes de África.

En este contexto, la destrucción ambiental y las violaciones a los derechos humanos provocados por actividades mineras se expresan en la contaminación de aguas, la destrucción de modos de vida de hombres y mujeres, la degradación e interrupción de las relaciones con la tierra, los desalojos forzados, las magras compensaciones, el desempleo, el deterioro de la salud pública y la seguridad y el avance sobre áreas protegidas. Ante esta realidad la declaración final contempla un cuaderno de reformas – identificadas como arenas de disputa – entre las que se encuentran: a) la introducción de impuestos específicos como a las ganancias de capital, regalías, e impuesto a las ganancias extraordinarias; b) la revisión del marco administrativo de evaluación de impactos ambientales y sociales, para tomar en cuenta cuestiones como los derechos humanos, género, vivienda y modos de vida; c) la abolición de las cláusulas de estabilidad, acuerdos de desarrollo y confidencialidad de auditorías ambientales de los códigos nacionales, ya que constituyen barreras a la autonomía de los estados y al acceso a la información pública.

En América Latina, promovido y organizado por la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) durante el segundo semestre de 2010, se realizó en Lima, Perú, el Foro de los Pueblos Indígenas “Minería, Cambio Climático y Buen Vivir”. Participaron en este encuentro pueblos indígenas, comunidades y organizaciones sociales del Abya Yala y representantes de África y Europa. En las sesiones de trabajo se denunció el consumismo occidental, el saqueo de los bienes naturales y la industrialización de los países desarrollados, a quienes se señaló como responsables de la crisis climática global a la que se suma la crisis alimentaria. Asimismo, se subrayó que los efectos del calentamiento global han aumentado los riesgos de vulnerabilidad de los derechos de los pueblos originarios y están modificando el modo de vida que se basa en el respeto a la Madre

Tierra. Se denunció que los territorios llenos de vida y armonía se han convertido en territorios de contaminación y de intoxicación de la salud humana, en territorios de militarización y criminalización de las luchas, en territorios de saqueo y pobreza a consecuencia de las políticas extractivistas guiadas por los gobiernos. Pero estos territorios se convirtieron a su vez en territorios de resistencia, de lucha, de formulación de propuestas y de ejercicio de los derechos originarios, como las consultas comunitarias realizadas por las autoridades ancestrales en diversos países del continente. La declaración final realiza un llamamiento a la unidad continental y mundial de los pueblos indígenas y los movimientos sociales a movilizarse en defensa de la Madre Tierra, por la construcción de Estados plurinacionales y la implementación del buen vivir a nivel global, como alternativas para superar las crisis climática, alimentaria y económica. Asimismo se exige a los Estados el cumplimiento pleno de los derechos indígenas reconocidos por el sistema internacional, en especial la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y se denuncian las políticas de criminalización implementadas por los Estados contra los defensores de la Madre Tierra, persiguiendo, enjuiciando, encarcelando y asesinando a los pueblos originarios. Los delegados y participantes convocaron al establecimiento de alianzas entre pueblos indígenas y redes sociales a fin de realizar acciones colectivas a nivel internacional y nacional para frenar estas políticas y se comprometieron a participar en el Referéndum Mundial Climático acordado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba.

La declaración final rechaza de manera rotunda la minería transnacional bajo la consigna “No a la minería, sí a la vida” y exige la inmediata derogatoria de los títulos y concesiones mineros inconsultos. Reivindica también para los pueblos indígenas la propiedad ancestral comunal del suelo, subsuelo y recursos naturales que yacen en los territorios y exige a los organismos de Naciones Unidas que los bienes naturales sean declarados patrimonio de los pueblos indígenas que los albergan. La extensa declaración, que incluye reivindicaciones en materia de política agrícola, del buen vivir y de reconocimiento de derechos ancestrales culmina con un llamamiento a la constitución de una plataforma continental de lucha frente a las políticas extractivas y una convocatoria a la realización de un próximo foro en el marco de la V Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Ayala, que tendrá lugar en 2011 en Bolivia y de una Movilización Continental el 21 de junio del 2011 en defensa de la vida, por la reconstitución del Buen Vivir, por el ejercicio pleno de los derechos frente a los impactos de la minería, la crisis climática y las empresas.

Para concluir este breve repaso de algunas de las iniciativas más importantes de articulación continental e internacional de las resistencias a la minería

transnacional es preciso resaltar las actividades, organizaciones y campañas de diferentes partes del mundo que se dieron cita en el Foro Social Mundial realizado en la ciudad de Dakar, Senegal, en febrero de 2011, bajo el marco de las rebeliones populares que conmovían al norte de África y Medio Oriente. En este sentido, el Foro fue un nuevo espacio de encuentro y fortalecimiento de las convergencias globales frente a la megaminería, las transnacionales y los responsables de la crisis climática.

Por otra parte, en el terreno de las articulaciones binacionales debe considerarse el bloqueo regional contra la minería en la región cordillerana de Argentina y Chile materializado a través del “Abrazo binacional a la Cordillera” en enero de 2011. Esta protesta fue impulsada por las Asambleas Ciudadanas de las provincias argentinas de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, nucleadas en la UAC; en articulación con experiencias de resistencia a la minería en Chile. El objetivo de esta novedosa acción fue denunciar la vigencia del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Integración y Complementación Minera firmado en 1997 y que, según las organizaciones convocantes, significó la entrega de la Cordillera a las transnacionales contribuyendo a la constitución de un “tercer Estado” minero transnacional exactamente en las nacientes de agua de ambos países. La protesta asumió la modalidad de bloqueos simultáneos en los distintos pasos fronterizos en Uspallata, Mendoza (ruta internacional argentino-chilena n° 7); Belén, Cerro Negro, Catamarca (ruta nacional n° 40); Tucumán-Catamarca, límite Ruta 337- Valles Calchaquíes y Patquía, La Rioja (nudo vial ruta nacional n° 38). En la localidad de Rodeo, provincia de San Juan, distintas organizaciones comunitarias chilenas y argentinas sacudieron la tranquilidad de ese poblado rural férreamente controlado por la transnacional Barrick Gold, que recurrió a la policía local para interrumpir y reprimir la marcha. Estas acciones binacionales exigieron la anulación de todos los convenios megamineros y la expulsión de las mineras de sus territorios en respeto a la autodeterminación de los pueblos. También reafirmaron la decisión de fortalecer y multiplicar las medidas de fuerza hasta que se modifique la legislación minera vigente y se sancione una ley nacional de prohibición de la megaminería.

Las experiencias referidas no agotan el intenso proceso de luchas y acciones contra las industrias extractivas, pero permiten dar cuenta de la importancia y visibilidad que cobró en los últimos años la lucha contra la minería transnacional y de algunas de las características y desafíos que enfrenta. El desarrollo de la crisis económica internacional parece asumir en la mayoría de los países latinoamericanos perfiles que combinan altos índices de crecimiento económico responsables de la sensación de bienestar material de algunos sectores de la población, por cierto no mayoritarios, con una intensificación

de los procesos de desposesión de los bienes comunes naturales de inédita intensidad. La retórica neodesarrollista que promueve estos procesos tiende a visibilizar los supuestos beneficios inmediatos de esta lógica (crecimiento económico, generación de empleos) devaluando y ocultando las terribles consecuencias ambientales y sociales que esta lógica de “superación de la crisis” plantea y planteará en un futuro cercano. Por otra parte, este proceso de recolonización continental practicado por multinacionales y gobiernos tanto en África como en América Latina enfrenta intensas experiencias de resistencia y lucha protagonizados por sectores populares y clases subalternas que desafían la lógica de desposesión y reclaman el derecho a la vida. En este heterogéneo y vital entramado de acciones, resistencias y sueños se forjan asimismo los debates y las propuestas que postulan e intentan construir cotidianamente un horizonte civilizatorio alternativo caracterizado por la desmercantilización, la descolonización y la emancipación de los pueblos.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Agencia Petrobras de Noticias 2010 *Descoberta de petróleo em Angola*. Disponible en: <http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/>

AngloGold Ashanti 2007 *Reporte del país Colombia 07*. Disponible en: www.anglogold.co.za

Antonelli, Mirta 2009 “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable” en Svampa, Maristella, Antonelli, Mirta 2009 *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Editorial Biblos).

AA. VV. 201 *La resistencia de las comunidades de Ayavaca* (Lima: CONACAMI-FEPROCCA).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2009 *Vale realiza investimento recorde em 2008: US\$ 10,2 bilhões* (Santiago de Chile: CEPAL) Nota de prensa, 21 de enero de 2009.

Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI) 2009 *La invasión de nuestros territorios: la expansión de las concesiones mineras en el centro del Perú* (Lima: CONACAMI).

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) 2010 *Buen Vivir. Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas* (Lima: CAOÍ).

Conferência Episcopal de Angola e São Tomé 2008 *Transparência no sector petrolífero angolano 2002-2006* (Luanda, CEJP).

Defensoría del Pueblo 2009 *Reporte de conflictos sociales* (Lima: Defensoría del Pueblo), agosto 2009.

I Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale 2010 *Dossiê dos impactos e violações da Vale no mundo* (Rio de Janeiro: Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale). Versión preliminar.

Financial Times 2010 *Brazil accelerates investment in Africa*, artículo publicado en versión electrónica 09/02/2010. Disponible en: <http://www.ft.com/>

Gudynas, Eduardo 2011 “La ecología política del progresismo sudamericano: los límites del progreso y la renovación verde de la izquierda” en *Revista Sin Permiso*, No. 8. Disponible en: <http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3849>

Gudynas, Eduardo 2011 “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo” en *América Latina en movimiento* (Quito:ALAI), No 462, febrero;

Jornal O Globo 2011 (a) *A Vale registra lucro recorde de R\$ 30 bilhões em 2010*, artículo publicado en versión electrónica 25/02/2011. Disponible en: <http://oglobo.globo.com/>

Jornal O Globo 2011 (b) *Do Rio Doce para o mundo: Vale investirá mais de US\$ 9 bi no exterior até 2014*, artículo publicado en versión electrónica 12/03/2011. Disponible en: <http://oglobo.globo.com/>

Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia 2009 *El Vivir Bien como respuesta a la crisis global* (La Paz: MRE).

Performances 2009 *Le secteur minier en Afrique Subsaharienne. Problématiques, Enjeux et Perspectives* (Dakar : Performances Management Consulting). Disponible en: www.performancesconsulting.com

Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, em Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO).

Selemane, Tomás 2010 *Questões à volta da mineração em Moçambique*. Relatório de Monitoria das Actividades Mineiras em Moma, Moatize e Sussundenga (Maputo: CIP).

Seoane, José, Taddei, Emilio, Algranati, Clara 2010 *Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y alternativas desde los pueblos* (Rio de Janeiro: Diálogo de los Pueblos-GEAL).

Valencia, Mario A 2010 *Colombia: paraíso de las transnacionales mineras*. Disponible en: <http://www.cronicon.net/paginas/edicantes/ediciones53/nota8.htm>

Sitios en Internet de las empresas:

AngloGold Ashanti
www.anglogold.co.za

Vale
www.vale.com

